

EXÁMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DDHH, EMPRESAS Y AMBIENTE

AGRONEGOCIOS

Según la Revisión de la Gobernabilidad Pública de Paraguay 2018 de la OCDE, la economía del Paraguay depende en gran medida de la agricultura de monocultivo en gran escala, y la ganadería, que proporcionan riqueza económica a corto plazo a un grupo muy pequeño con daños ambientales a largo plazo. El país es el sexto productor mundial de soja y el cuarto exportador. Este modelo económico, basado en el extractivismo, aumenta la desigualdad en el país, el 85,49% de tierras productivas con más de 500 hectáreas se encuentra en manos del 2,58% de la población. En contrapartida, el 0,73% de terrenos con menos de 5 hectáreas se distribuye entre el 40,74% de la población, mayormente comunidades campesinas e indígenas. Además, el cambio climático está afectando la vida y la salud de las personas. Estos impactos se ven amplificados, precisamente por las perturbaciones humanas en la naturaleza, como la deforestación masiva y los incendios forestales. Un estudio científico reciente reveló daños en el ADN de niños paraguayos expuestos a la fumigación con agroquímicos de la soja, donde las células dañadas pueden repararse, pero también pueden mutar y causar enfermedades que afectan al desarrollo neurológico, que están vinculadas a la enfermedad de Parkinson, la diabetes e incluso el cáncer. Los DDHH del pueblo paraguayo están bajo presión y el estado paraguayo a menudo descuida sus obligaciones positivas para asegurar la protección de su población de las violaciones causadas por las grandes empresas, así como por el propio Gobierno. El Paraguay, independientemente de sus deberes y obligaciones constitucionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está obligado a actuar "de conformidad con el principio de precaución para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal en caso de posibles daños graves e irreversibles al medio ambiente, incluso en ausencia de certidumbre científica".

RECOMENDACIONES ANTERIORES

En el ciclo anterior (sesión 24), Paraguay recibió recomendaciones sobre el impacto del agronegocio en el ambiente, la población paraguaya y su salud. Entre ellas, la recomendación de Azerbaiyán, de seguir **mejorando la situación de los derechos humanos en el país**. Honduras se refiere a la **cooperación y mejora plena de los mecanismos internacionales de DDHH**. Switzerland sugiere **redoblar sus esfuerzos para resolver el problema de las tierras indígenas**. Bolivia y Noruega instan a **reforzar la aplicación de la política pública integral para los pueblos indígenas y fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena**.

DESAFÍOS E IMPACTOS

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POSITIVAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN Y VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE AGROTÓXICOS, COMO SE ESTIPULA EN LA LEY 3742/09.

Fumigación ilegal a gran escala con el uso de agroquímicos para el monocultivo por parte de la agricultura extensiva es una práctica común. Comunidades rurales e indígenas son víctimas de graves daños a la salud debido a la exposición persistente a los agroquímicos, lo que tiene repercusiones negativas no solamente para ellas, sino también para sus hijos y las generaciones futuras. El uso indiscriminado de productos agroquímicos también causa la contaminación del agua y de los acuíferos, haciendo imposible que la gente utilice sus fuentes de agua.

SIN PLAN DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Las empresas paraguayas e internacionales que operan en el país son responsables de violar los derechos humanos asociados a su funcionamiento y tienen estrecha relación con la degradación del medio ambiente; desde la contaminación del agua, el suelo y el aire hasta las cuestiones relacionadas con la tierra, la tala ilegal y la quema de bosques. El estado no sanciona ni limita a esas empresas que cometen delitos sociales y ambientales.

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y RIQUEZAS PARA POCAS PERSONAS, PRINCIPALMENTE PARA LA PRODUCCIÓN EN GRAN ESCALA

Alrededor de 300.000 familias rurales, campesinas e indígenas no poseen tierras para su subsistencia. Hecho que se viene agravando desde la dictadura de A. Stroessner (1954-1989), donde el Estado concedió tierras rurales a empresarios a cambio de favores. El Paraguay no ha adoptado medidas de

300.000 familias
sin tierra

derecho interno en relación a "las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus derechos sobre sus tierras tradicionales" (Corte IDH, 2006). El modelo económico agroexportador obliga directa e indirectamente a las comunidades a desplazarse o a vivir en condiciones de servidumbre y de trabajo forzoso en establecimientos agropecuarios.

RECOMENDACIONES

- Hacer cumplir **las decisiones de la Corte Interamericana y del Comité de Derechos Humanos**, así como las recomendaciones de los Relatores Especiales de las NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas y las cuestiones relativas a la tierra y el medio ambiente.
- Asegurar la **participación significativa de las comunidades indígenas y campesinas** en el diseño e implementación de las decisiones políticas y de desarrollo con repercusiones en el territorio. Asegurar el debido cumplimiento de la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
- Contar con un **Plan de Acción Nacional (PAN) sobre Empresas y Derechos Humanos** basado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que fueron aprobados por consenso por el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2011.

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW HUMAN RIGHTS, BUSINESS AND ENVIRONMENT

AGRIBUSINESS

According to the OECD's 2018 Public Governance Review of Paraguay, Paraguay's economy is heavily dependent on large-scale monoculture agriculture, and cattle ranching, which provide short-term economic wealth to a very small group with long-term environmental damage. The country is the world's sixth largest soybean producer and fourth largest exporter. This economic model, based on extractivism, increases inequality in the country; 85.49% of the farms with more than 500 hectares is in the hands of 2.58% of the population. In contrast, 0.73% of the farms with less than 5 hectares is distributed among 40.74% of the population, mostly rural and indigenous communities. In addition, climate change is affecting people's lives and health. These impacts are amplified precisely by human disturbances in nature, such as massive deforestation and forest fires. A recent scientific study revealed DNA damage in Paraguayan children exposed to agrochemical spraying of soybeans. Damaged cells can in some cases repair themselves, but can also mutate and cause diseases affecting neurodevelopment, which are linked to Parkinson's disease, diabetes and even cancer. The human rights of the Paraguayan people are under pressure and the Paraguayan state often neglects its obligations to ensure the protection of its population from violations caused by big businesses as well as by the government itself. Paraguay, regardless of its constitutional duties and obligations under international human rights law, according to the Inter-American Court of Human Rights, is obliged to act "in accordance with the precautionary principle to protect the rights to life and personal integrity in case of possible serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty".

PREVIOUS RECOMMENDATIONS

On the previous cycle (Session 24), Paraguay received recommendations on the impact of agribusiness on the environment, Paraguayan populations and their health. Azerbaijan recommended to continue improving the human rights situation in the country. Honduras refers to full cooperation and improvement of international human rights mechanisms. Switzerland suggests redoubling its efforts to resolve the problem of indigenous lands and prioritizing support to the Paraguayan Institute of Indigenous People. Bolivia and Norway urge to reinforce the implementation of the comprehensive public policy for indigenous peoples, in order to promote and protect all their rights.

CHALLENGES AND IMPACTS

PARAGUAY DOES NOT COMPLY WITH ITS OBLIGATIONS REGARDING THE AUTHORIZATION AND MONITORING OF THE APPLICATION OF PESTICIDES, AS STIPULATED IN LAW 3742/09

Large-scale illegal fumigation with the use of agrochemicals for monoculture is a common practice used for extensive agriculture. Rural and indigenous communities are victims of serious health damages due to persistent exposure to agrochemicals, which has negative repercussions not only for them, but also for their children and future generations. The indiscriminate use of agrochemicals causes moreover contamination of drinking water and aquifers, making it impossible for people to use their water sources.

PARAGUAY DOES NOT HAVE A 'BUSINESS AND HUMAN RIGHTS ACTION PLAN'

Paraguayan and international companies operating in the country are responsible for violating the human rights associated with their operations, closely related to environmental degradation; from water, soil and air pollution to land grabbing, illegal logging and forest fires. The state does not sanction or limit those companies that commit social and environmental crimes.

LAND GRABBING AND THE ENRICHMENT WITH NATURAL RESOURCES BENEFITS A SMALL GROUP OF PEOPLE, MAINLY FOR LARGE-SCALE SOYBEAN AND CATTLE PRODUCTION.

Around 300,000 rural and indigenous families are still landless. This situation got worse during the dictatorship of Alfredo Stroessner (1954-1989), when the State granted rural lands to businessmen in exchange for favors. Paraguay has not adopted domestic laws in relation to "legislative,

300.000
landless
families

administrative and any other measures necessary to create an effective mechanism for reclaiming ancestral lands of the members of indigenous peoples to ensure their rights over their traditional lands" (IACHR Court, 2006). The economic model, based on agro-export, directly and indirectly displaces indigenous and rural communities and forces them or to live in conditions of servitude and forced labor on farms.

RECOMMENDATIONS

- To **enforce the decisions of the Inter-American Court and the Human Rights Committee**, as well as the recommendations of the United Nations Special Rapporteurs on indigenous peoples' rights and land and environmental issues.
- Ensure the **meaningful participation of indigenous and peasant communities** in the design and implementation of political and development decisions with repercussions on the territory. Ensure due compliance with free, prior and informed consultation and consent of indigenous communities.
- Have a **National Action Plan (NAP) on Business and Human Rights** based on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights that were approved by consensus by the UN Human Rights Council in 2011.